

## CAPITULO 6

### Comunidades Si, Jaulas No

*Estas son las victorias por las que vivo, mi propósito. Saber que menos personas estarán sometidas a las condiciones actuales en Etowah es la respuesta a un rezo. Sólo espero que sigan destacando a lugares similares.*

— Karim Golding, detenido en la cárcel del condado de Etowah en Alabama de 2016 a 2021

La cárcel del condado de Etowah es un edificio municipal común y corriente en el centro de Gadsden, Alabama. Es posible que los transeúntes no noten los signos reveladores de una cárcel: el exterior gris y sin adornos, la pequeña franja de ventanas o el alambre de púas alrededor de la parte trasera del edificio. Pero durante veinticuatro años, Etowah fue uno de los peores centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos y llegó a simbolizar todo lo malo del sistema. A las personas detenidas allí se les negaba sistemáticamente atención médica o se les decía que simplemente bebieran agua y tomaran ibuprofeno para cualquier dolencia. También regularmente les servían comida podrida y mohosa. Una investigación en 2018 reveló que el sheriff se había embolsado \$750.000 dólares asignados para el suministro de alimentos en la cárcel y había comprado una casa en la playa que costaba una cantidad casi equivalente.<sup>1</sup> La mayoría de los inmigrantes detenidos en Etowah fueron trasladados desde otros estados en espera de una apelación de su caso. Sin recreación al aire libre espacio, pasarían meses o años en la cárcel sin siquiera poner un pie afuera.

Karim Golding, un inmigrante de Jamaica que vivía en Estados Unidos desde que tenía nueve años, ya había pasado diez años en una prisión federal antes de ser trasladado a Etowah por otros cuatro. Al inicio de la pandemia, Golding y otros inmigrantes detenidos organizaron protestas por los protocolos negligentes dada la pandemia en Etowah. En respuesta, funcionarios de la cárcel lo enviaron a aislamiento durante dos meses. Las protestas dentro y fuera de la cárcel eran algo común. A veces, cuando activistas protestaban fuera de la cárcel, las personas detenidas colocaban carteles en las pequeñas ventanas del otro lado del edificio que decían: “Gracias” o simplemente: “Extrañamos a nuestros hijos”.

Para abordar los problemas de la detención migratoria, los defensores a menudo se centran en mejorar las duras condiciones de encarcelamiento y aumentar la supervisión de centros de detención. Los abogados brindan asesoramiento para apoyar casos individuales y emprender litigios de impacto para minimizar el tiempo que alguien podría pasar en detención migratoria. Muchos destacan la lejanía de los centros de detención y el aislamiento que generan. Los defensores han argumentado que si los centros de detención estuvieran más cerca de las ciudades principales, la proximidad a abogados y otros servicios podría hacer que la experiencia fuera más humana. Pero durante la era de Obama, activistas por la justicia migrante comenzaron a desilusionarse con la posibilidad de una reforma. A pesar de los innumerables informes, investigaciones de los medios, huelgas de hambre y protestas que exponían la crueldad de la detención de inmigrantes, las condiciones siguieron siendo terribles. La gente siguió muriendo y el sistema siguió expandiéndose. Activistas y defensores estaban menos dispuestos a aceptar los mínimos cambios que se lograron al trabajar para hacer la detención más humana, y así proliferaron las exigencias a favor de la abolición. Los regímenes de deportación de Obama y Trump aportaron una claridad cada vez mayor y avanzaron en la audacia de la demanda. A su vez, los centros de detención de inmigrantes y las

comunidades donde estaban ubicados se convirtieron en sitios clave de resistencia.

Durante más de una década, llamar por el cierre de centros de detención específicos ha sido una exigencia central del movimiento para acabar con la inmigración detención. Las campañas de base han empleado dos estrategias contra los centros de detención en comunidades de todo el país: (1) impedir nuevos contratos o detener la renovación de contratos existentes y (2) aprobar legislación a nivel estatal para poner fin al uso de cárceles locales o prisiones privadas y eliminar gradualmente la detención existente en el estado. Desde que comenzaron estos esfuerzos, organizadores y defensores junto con personas detenidas han sido exitosos al terminar con contratos de detención de ICE en más de veinte cárceles locales.

Estas estrategias han sido efectivas en algunos estados con entornos políticos más amigables, como California e Illinois. Pero en lugares como Alabama, donde el sheriff del condado de Etowah y políticos locales son los defensores más aferrados de la cárcel, poner fin al contrato requirió intervención federal. En 2015, una coalición de organizaciones locales y nacionales liderada por el Centro de Trabajadores Adelante Alabama lanzó la campaña Shut Down Etowah (Cierren a Etowah). La campaña desplegó varias tácticas, incluida la presentación de peticiones masivas de hábeas corpus para lograr la liberación de personas, exponiendo los abusos y las condiciones dentro de Etowah, protestando frecuentemente fuera de sus instalaciones y presionando al DHS para que rescindiera el contrato a través de la incidencia administrativa. En abril de 2022, siete años después de que se lanzara la campaña, DHS anunció que dejaría de detener inmigrantes en la cárcel del condado de Etowah.

Muchas condiciones cambiantes ayudan a explicar cómo comenzamos finalmente a ganar campañas para poner fin a contratos de detención. Después de cuatro años de Trump, el público era más consciente de la crueldad de ICE y más gobiernos locales y estatales querían distanciarse de su retórica xenófoba. Si bien pocas personas fueron liberadas debido a la pandemia de COVID-19, la reducción

en aplicación de leyes migratorias en el interior y los cierres de fronteras dieron como resultado que se detuviera a menos personas. Algunos condados ya no obtenían los mismos ingresos de sus contratos debido a la reducción de la población detenida y, cuando se les presionaba, estaban más abiertos a poner fin a sus acuerdos con ICE. Y quizás lo más crítico es que los levantamientos de George Floyd en la primavera y el verano de 2020 despertaron a la nación ante la naturaleza racista de estos sistemas. Como resultado, muchos políticos y defensores de los derechos inmigrantes estaban más dispuestos que nunca a exigir la abolición de la detención.

Estas condiciones eran críticas, pero las campañas locales y el llamado para cerrar los centros de detención fueron clave para ganar estas “luchas locales”. En este capítulo, comparto historias sobre algunas de las campañas que han ayudado a cambiar el terreno nacional. Ésta no es una historia exhaustiva de las numerosas campañas contra la detención; A través de estos ejemplos, pinto una imagen de cómo las comunidades se defendieron a pesar de los obstáculos que enfrentaron. Estos esfuerzos a menudo involucraron a muchos actores: personas detenidas que protestaban desde adentro, familiares y organizadores afuera exigiendo su liberación y el cierre del centro, abogados que apoyaban sus casos o presentaban litigios, defensores que presionaban por legislación estatal o intervención federal. e investigadores y periodistas que exponen todos los daños que causa la detención. Durante cuarenta años, la trayectoria de la detención migratoria en Estados Unidos ha sido de expansión: más dinero, más camas. Pero gracias a estas campañas, el sistema se redujo por primera vez.

## Más allá de la reforma: el llamado al cierre

Cuando me uní por primera vez al personal de DWN en marzo de 2009 como organizadora, el comité directivo liderado por la membresía había elaborado un plan de campaña para que yo lo implementara. La campaña se centraría en mejorar las condiciones y la supervisión de centros de detención, al mismo tiempo que presionaría por alternativas a la detención y abogados designados por el gobierno. Obama acababa

de asumir el cargo y había alguna esperanza de que pudiéramos reformar la detención de inmigrantes, pero esta campaña en particular se sentía solo como construir jaulas más bonitas. Afortunadamente, había espacio para cambios. Después de conversaciones con miembros de DWN y nuestra directora ejecutiva en ese momento, Andrea Black, decidimos centrarnos en detener la expansión del sistema de detención, que se había duplicado desde que se había fundado la organización en 1997.

Éramos un equipo pequeño con cuatro empleadas en ese momento, y nuestra membresía estaba compuesta por una variedad de grupos, incluidos proveedores de servicios legales, organizaciones políticas, grupos de base y personas anteriormente detenidas. DWN nunca antes había lanzado una campaña y se aprendieron muchas lecciones a lo largo del camino. Pero incluso entonces, sabíamos que sería esencial anclar nuestra exigencia de detener la expansión en las organizaciones de base. Lanzamos la campaña Dignidad, No Detención para prevenir la expansión de la detención a principios de 2010 en asociación con Puente en Arizona, Georgia Detention Watch en Georgia y Grassroots Leadership en Texas.

Però el sistema de detención siguió creciendo. Se encarcelaba a más personas que nunca: más de cuatrocientas mil personas cada año bajo Obama. Estábamos frustrados. Algunos miembros del personal y muchos organizadores que formaban parte de la membresía comenzaron a preguntarse si la falta de claridad sobre nuestra visión estaba perjudicando nuestra habilidad de ganar. La exigencia política de DWN era “la detención como último recurso”, pero este marco sólo fomentó la idea de que algunas personas merecen ser detenidas. Comenzamos a discutir con nuestra membresía la posibilidad de pedir la abolición de la detención.

En una conferencia en Austin en 2011, a la que asistieron 200 miembros, hicimos que los participantes se pusieran de pie en diferentes partes de la sala según su posición sobre la abolición versus la mejora de las condiciones de detención de inmigrantes. Inmediatamente se volvió polémico. Algunos miembros se sintieron incómodos con el ejercicio y se sintieron atacados por su trabajo para hacer que la detención fuera más humana. Otros se

sintieron energizadas y dijeron que las discusiones les ayudaron a cuestionar el sistema en sí y se preguntaron si valía la pena seguir interactuando con ICE. Seguimos discutiendo si queríamos aceptar la abolición como organización y contactamos a Critical Resistance para obtener orientación sobre cómo incluir a nuestros miembros en el proceso.

Antes de las elecciones de 2012, sabíamos que teníamos que hacer algo más audaz para lograr que Obama actuara en el último año de su primer mandato. En una reunión estratégica de DWN en DC, la membresía propuso centrarse en un conjunto de centros de detención clave, documentar sus condiciones y pedir su cierre. A Abraham Paulos de Families for Freedom se le ocurrió el nombre, Expose and Close (Exponer y Cerrar). Un grupo de miembros, desde organizadores hasta defensores, proveedores de servicios legales y académicos, se reunieron para coordinar Expose and Close. Elegimos qué instalaciones priorizar y acordamos quién tomaría la iniciativa de visitar cada centro de detención, redactar un informe y organizarse localmente. Decidir en la lista de centros fue un desafío, por decir lo menos. Todos eran malos, pero nuestro objetivo era resaltar aquellas cárceles que ejemplificaban los problemas de la detención: las pésimas condiciones de vida, la lejanía, la falta de atención médica, la horrible comida, el acceso limitado al aire libre y las represalias y abusos que enfrentaban los migrantes al protestar por su encarcelamiento. Después de que decidimos la lista, los miembros visitaron los centros de detención ese verano para entrevistar a personas detenidas y escribieron informes en el otoño. En las semanas previas al lanzamiento, después de un poco de presión por parte de las fundaciones, el equipo de comunicaciones America's Voice se unió al esfuerzo para amplificar nuestra exigencia.

Expose and Close se lanzó poco después de las elecciones de 2012 con informes sobre cada una de las diez cárceles, y el representante (eventualmente gobernador) Jared Polis de Colorado se unió a la llamada de prensa. Con la ayuda de America's Voice, los periodistas reportaron sobre el tema. Resulta que a los medios les encantan las listas. Muchos artículos de

noticias se centraron en que estas cárceles eran las diez peores, pero seguimos señalando que simplemente revelaban los problemas con el sistema en su conjunto. Unas semanas más tarde, más de 300 organizaciones firmaron nuestro llamado para cerrar estos diez centros de detención.

La campaña ayudó a aclarar el propósito de DWN: semanas después de que se lanzara *Expose and Close*, la organización adoptó oficialmente una visión de abolición de la detención. La administración Obama no cumplió con nuestras exigencias, pero una década después seis de las diez cárceles de la lista ya no son centros de detención de ICE, incluida la cárcel del condado de Etowah en Alabama y el centro de detención del condado de Irwin en Georgia.

En los años siguientes, continuamos nuestros esfuerzos por cerrar centros de detención, pero también probamos otras estrategias: pedir el fin de la cuota de camas de detención y quitarle fondos a ICE y CBP, exponer inspecciones falsas y muertes negligentes en el sistema, organizar tribunales populares en los centros de detención y llevar a “ICE a juicio”. Pero en 2018, volvimos la cuestión de los esfuerzos coordinados a nivel nacional a favor de los cierres. En el apogeo del momento de separación familiar bajo Trump, debido al creciente número de detenciones, la administración comenzó a utilizar las instalaciones de la Oficina Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés) para detener personas bajo custodia de ICE. Les inmigrantes fueron detenidos en cinco prisiones de BOP en Arizona, California, Oregón, Texas y el estado de Washington. Al mismo tiempo, ICE emitió solicitudes de propuestas para una expansión masiva de la detención de familias en bases militares, incluida la capacidad de detener a 15.500 inmigrantes adicionales.

En respuesta a la expansión propuesta por Trump, DWN lanzó la campaña *Comunidades Si, No Jaulas* en octubre de 2018 para detener la expansión de la capacidad de detención, cerrar los centros existentes y detener la proliferación de la agenda de ICE en el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa. La campaña se centró inicialmente en detener el uso de las cinco prisiones de la BOP y apoyar la coordinación entre organizadores y abogados para garantizar liberaciones. En noviembre de 2018, la BOP puso fin a la práctica de detener a inmigrantes bajo la custodia de ICE, pero ICE seguía ampliando

la detención de inmigrantes en todo el país.

Al igual que la campaña Ni1Mas Deportación coordinada por NDLON, Comunidades Si, Jaulas No fue una exigencia y una estrategia orgánica. No se trataba de DWN; se trataba de que las comunidades locales aprendieran unas de otras y avanzaran en sus campañas. Estábamos allí para ayudar a coordinar, conectar a la membresía, elaborar estrategias y proporcionar recursos y amplificación. A finales de 2019, nos reunimos en un encuentro de cien miembros y aliadas en Birmingham, Alabama, donde los organizadores habían estado liderando la campaña Shut Down Etowah. Organizamos talleres sobre una variedad de tácticas y estrategias: brindar defensa legislativa estatal, apoyar a huelguistas de hambre, descifrar contratos de detención, presentar solicitudes de registros públicos, crear estrategias de comunicación contra la detención, etc. Los organizadores llevaron estas lecciones a sus comunidades para fortalecer aún más sus esfuerzos por el cierre.

Al año siguiente, a medida que crecía el llamado de #FreeThemAll (ver el prólogo) y se producían los levantamientos de George Floyd, también estábamos en medio de la planificación de escenarios en torno a las elecciones de 2020. Aprendiendo del esfuerzo de Expose and Close y la atención que recibió, decidimos exigir una vez más el cierre de un conjunto de centros de detención como parte de la campaña. Esta vez, lo llamamos los Primeros Diez hacia Comunidades Si, No Jaulas, identificando diez centros de detención que Biden cerrará en su primer año de presidente como hoja de ruta para poner fin a la detención para siempre.

## Un Fin a la Detención de Familias

Si bien la mayoría de las personas detenidas como inmigrantes son adultos solteros, la detención de unidades familiares ha provocado una indignación considerable, y con razón. Las instalaciones donde se detenía a las familias a menudo eran denominadas cárceles para bebés, y les niños bajo custodia de ICE experimentaban un profundo trauma psicológico. Debido a la

desnutrición y al estrés del encarcelamiento, les niñas a menudo perdían peso mientras estaban en prisión. Con ICE como autoridad, las relaciones familiares se vuelven confusas. Algunas activistas han percibido las campañas contra la detención familiar como más comprensivas y, por lo tanto, como una meta fácil de alcanzar, pero poner fin a la práctica no fue tarea fácil. Los esfuerzos contra la detención de familias demostraron ser pilares importantes hacia un llamado más amplio para poner fin a toda detención de inmigrantes.<sup>2</sup>

Durante el apogeo del proyecto de expansión de detención de Reagan a mediados de la década de 1980, el INS decidió dejar de entregar niñas migrantes no acompañadas a nadie que no fuera un padre o guardián. Para Jenny Flores, una joven salvadoreña de quince años, esto representó un problema ya que su madre, con quien intentaba reunirse en Los Ángeles, también era indocumentada. Su madre temía que ambas serían deportadas a una zona de guerra si ella iba a buscarla. Si bien los tíos de Flores tenían estatus legal y estaban dispuestos a acogerla, el INS se negó a entregársela. El INS contrató a una empresa privada, Behavioral Systems Southwest, para comenzar a detener a niñas en el Motel Mardi Gras en Pasadena.

Las condiciones eran pésimas. Después de dos meses en el centro de detención, Flores tenía una “preocupación intermitente por la muerte, la anorexia, y depresión”, según un examen médico. En otros centros de detención, les menores eran rutinariamente registradas desnudas al llegar, un proceso que incluía registros invasivos de las cavidades corporales.<sup>3</sup> Les abogades presentaron una demanda colectiva en nombre de Flores y otras niñas detenidas por el INS que se prolongó durante años. Finalmente se llegó a un acuerdo en 1997 con el gobierno federal que establecería restricciones a la detención de niñas. Estas restricciones evolucionaron con el tiempo, pero el acuerdo permitió que niñas fueran entregadas a familiares que no fueran sus padres, exigió ciertas condiciones para niñas bajo custodia, incluida la concesión de licencias estatales a las instalaciones, y alentó la pronta liberación. Posteriormente, el acuerdo de Flores se convirtió en una de las herramientas clave utilizadas para poner fin a la detención de familias.

El primer centro de detención de familias inmigrantes, donde los padres eran detenidos junto con sus hijos, se inauguró en 2001. El gobierno convirtió un antiguo hogar de ancianos que había sido convertido en cárcel juvenil en Leesport, Pensilvania, en el Centro Residencial Familiar del Condado de Berks. El centro detuvo a familias que solicitaban asilo durante algunas semanas hasta que se completaron las entrevistas de selección. Era un centro pequeño y tenía capacidad para menos de cien personas.

En 2005, mientras el gobierno federal tomaba medidas enérgicas contra la inmigración después del 11 de septiembre, comenzó a separar a las familias que llegaban a la frontera, enviando a los padres a detención y a los niños a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Las organizaciones humanitarias, incluida la Comisión de Mujeres Refugiadas, expresaron su preocupación por las separaciones. En respuesta, el DHS contrató a Corrections Corporation of America para convertir una de las prisiones cerradas de mediana seguridad de la compañía al norte de Austin, Texas, en un centro de detención familiar como una “solución” a las separaciones familiares que estaban sucediendo. El Centro de Detención T. Don Hutto abrió sus puertas en mayo de 2006 y tenía capacidad para detener a quinientas personas. Su apertura provocó una de las primeras campañas importantes de cierre que surgió cuando el movimiento comenzó a luchar contra la detención masiva de inmigrantes.<sup>4</sup>

En septiembre de 2006, un grupo de nosotros - organizadores, defensores y académicos —nos reunimos en la oficina de la ACLU de Texas en Austin para determinar qué hacer sobre Hutto. El grupo, incluido mi colega Bob Libal, continuó reuniéndose y finalmente formó Tejanos Unidos por las Familias (TUFF por sus siglas en inglés), una coalición que incluía a residentes de Taylor, donde se encuentra Hutto. TUFF adoptó un enfoque múltiple en su campaña para cerrar Hutto que involucró cuatro niveles: litigio, organización de base, participación de los medios y incidencia legislativa.

Vanita Gupta, de ACLU (que se convirtió en fiscal general asociada durante el gobierno de Biden) y la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, Barbara Hines, tomaron la iniciativa en los litigios. Una vez que Hines recorrió Hutto,

descubrió que muchas de las familias pasaban meses allí y que la instalación había realizado muy pocas actualizaciones con respecto a su versión anterior como prisión de seguridad media. La mayoría de niños detenidos en Hutto tenían menos de doce años, y los mayores de seis eran rutinariamente separados de sus padres dentro del centro. Los niños más pequeños serían retenidos con sus madres en una celda con baño y cuna. Se exigía que todos los niños usaran uniformes de prisión, y los bebés vestían mamelucos de prisión.<sup>5</sup> Los guardias a menudo amenazaban con separarles si los niños se portaban mal. Hines, Gupta y sus colaboradores demandaron al DHS por las condiciones de confinamiento. En 2007, resolvieron el caso después de obtener algunas mejoras en las condiciones y revisiones periódicas, pero la detención familiar continuó. Gupta y Hines mantuvieron extensas conversaciones con TUFF para determinar sus próximos pasos.

La Comisión de Mujeres Refugiadas documentó abusos en el centro y mantuvo la presión sobre la agencia en DC. Pero el poder de las bases también era esencial. Los esfuerzos de organización de base de TUFF incluyeron vigiliadas periódicas fuera del centro de detención y la creación de una base en Taylor. Después de enterarse de un plan de ICE para abrir tres centros de detención familiar nuevos, TUFF aceptó el llamado para poner fin a la detención familiar en todo el país. En 2009, cuando Obama asumió el cargo, TUFF organizó “100 eventos en los primeros 100 días” para detener las expansiones, durante los cuales los organizadores recogieron cincuenta y cinco mil firmas de peticiones, organizaron colectas de juguetes y libros e intensificaron sus esfuerzos de divulgación y medios de comunicación para llamar la atención sobre el tema.<sup>6</sup> La campaña organizó la proyección de dos documentales sobre la detención familiar, *Hutto: La Prisión Familiar de América* y *Los Últimos de Estos*, que se estrenó en el festival de cine South by Southwest en Austin. Los documentales incluyeron entrevistas con familias anteriormente detenidas en Hutto e imágenes del interior de la cárcel: niños y adolescentes adentro y celdas con cunas. Hutto se había convertido en el centro de detención más famoso del país.

Más tarde ese año, TUFF finalmente obtuvo una gran victoria cuando la administración Obama puso fin a la detención de familias en Hutto y ya dejaron de detener a niños allí. Fue una rara reforma positiva bajo Obama en el tema de la detención. Pero Hutto siguió abierto para mujeres y el centro de Berks en Pensilvania

continuaron deteniendo a familias.

Casi cinco años después del fin de la detención familiar en Hutto, Obama restableció la detención familiar masiva, reconvirtiendo el Centro Residencial Karnes y abriendo un nuevo centro de detención familiar con 2.400 camas en Dilley, Texas (explicado en el capítulo 2). Fue un golpe devastador para activistas contra la detención. Ambas instalaciones estaban más lejos de Austin que Hutto, lo que hacía más difícil para los inmigrantes acceder a abogados u otras formas de apoyo y ocultaba la detención familiar del público. Las condiciones en los centros de detención eran terribles y tanto organizaciones nacionales como locales presionaron para que ICE revirtiera la práctica. En Pensilvania, donde se encontraba Berks, se supo que un guardia agredió sexualmente a una mujer inmigrante de diecinueve años que había sido detenida ahí con su hijo de tres años. El incidente fue el impulso para que grupos locales lanzaran la campaña Shut Down Berks (Cierren a Berks) en 2015.

Los medios cubrieron los daños que causa la detención familiar, organizadores protestaron y los abogados entablaron demandas. En 2015, la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Dolly Gee, de California, dictaminó que el acuerdo Flores se aplica tanto a menores acompañados como no acompañados, lo que incluye a niños en detención familiar. Después del anuncio, miembros de TUFF se reunieron en Austin, en una poza local para nadar, Barton Springs, para leer la cobertura de la decisión del New York Times y celebrar. La decisión limitó a veinte días la cantidad de tiempo que un niño podía pasar en detención familiar, pero la administración Obama estaba convencida de que encarcelar a las familias ayudaría a disuadir la migración futura y apeló la decisión. Berks, Dilley y Karnes continuaron deteniendo a familias hasta el final de su mandato como presidente.

El encarcelamiento de más de 120.000 estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo el proyecto de detención familiar más grande en la historia de Estados Unidos. En la década de 1940, adultos y niños de ascendencia japonesa fueron detenidos y encarcelados en campos a lo largo del oeste de Estados Unidos. Se les consideraba enemigos del Estado debido a su origen étnico. Satsuki Ina nació en uno de estos campos. Después de la

guerra y antes de ser liberadas, Ina y su familia fueron reubicadas en el campo de internamiento de Crystal City en el sur de Texas, aproximadamente a medio camino entre el centro de detención familias de Dilley y la frontera entre Estados Unidos y México.

En 2016, Ina, que es psicoterapeuta capacitada, visitó el Centro Residencial Familiar Karnes después de que Carl Takei, un abogado de ACLU cuyos abuelos fueron encarcelados durante la Segunda Guerra Mundial, la animó a ir a evaluar a los niños en busca de traumas. Ina relata la visita: “Fue como piezas fracturadas que intentaban juntarse: su experiencia actual, mi historia, estar en este lugar donde había estado cuando era niña”.<sup>7</sup>

Más tarde, en 2019, mientras Ina y otras planeaban una peregrinación a Crystal City para recordar y sanar el trauma generacional, se acercó a Bob Libal de Grassroots Leadership. Sugirió que se detuvieran en Dilley después de su peregrinación para protestar por la detención de familias. Casi al mismo tiempo, Ina y otras activistas japoneses-estadounidenses fundaron la organización Tsuru for Solidarity (Tsuru por la Solidaridad) para apoyar la lucha contra la detención de inmigrantes.

*Tsuru*, la palabra japonesa para grulla, representa transformación, curación y no violencia en la cultura japonesa. Antes de la protesta, Tsuru hizo un llamado a la gente de todo el país para que enviaran diez mil grullas de origami con “mensajes de solidaridad, esperanza y amor” que luego colgarían en las vallas alrededor de Dilley. Decenas de cajas empezaron a llegar a la oficina de Grassroots Leadership en Austin; Recibieron treinta mil grullas en dos semanas y media. Entre las que enviaron grullas de origami se encontraban personas encarceladas en la prisión estatal de San Quentin, en California. El día de la protesta, los tambores taiko resonaron en las afueras de Dilley mientras los sobrevivientes permanecían a lo largo de la cerca, sosteniendo carteles con imágenes de ellos mismos cuando eran niños en los campos y las palabras “No estuvo bien en 1942, no está bien ahora”.<sup>8</sup>

Después de la protesta, miembros de Tsuru y otros sobrevivientes viajaron a la frontera para reunirse con Laredo Immigrant Alliance (la Alianza Inmigrante de Laredo), un grupo que apoyaba a mujeres y niños recientemente liberados de detención. A través de intérpretes, los sobrevivientes formaron un círculo con las mujeres y compartieron sus historias de su encarcelamiento durante la Segunda Guerra Mundial. Mike Ishii, cofundador de Tsuru cuya madre fue encarcelada en un campo en Idaho, resumió algo de lo que compartieron los sobrevivientes: “Entendemos lo que han pasado porque nos pasó a nosotros. Volvimos por ustedes. Cuando nos detuvieron, nadie protestó, nadie se acercó a las vallas. Estamos aquí y lucharemos por ustedes... Sobrevivirán. Si lo hicimos, ustedes lo harán”. Una de las madres finalmente habló sobre su experiencia: “Estuve en Karnes durante un año y se llevaron a mi hija y fue insostenible. Pero usted estuvo allí durante cuatro años y debió ser peor para usted”.<sup>9</sup>

La administración Trump continuó desafiando al acuerdo de Flores para retener a familias inmigrantes indefinidamente. En 2019, la jueza Dolly Gee falló en contra de la administración y calificó su propuesta de “kafkiana”.<sup>10</sup> Luego, al comienzo de la pandemia, la jueza Gee ordenó a la administración que liberara a todos los niños que habían estado bajo custodia durante más de veinte días.

Como muchas de las campañas locales contra la detención, 2020 fue un año crucial en la lucha para poner fin a la detención familiar. Grupos que habían estado luchando durante años contra esta práctica (Shut Down Berks, Grassroots Leadership, RAICES, Tsuru for Solidarity y DWN) comenzaron a coordinarse para lograr la liberación de familias a medida que el COVID-19 se propagaba por el sistema de detención. Muchas de las familias de Berks eran de Haití y las organizaciones comenzaron a trabajar con Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance (la Alianza Puente Haitiana), para fortalecer la campaña. Juntas, el grupo formó la Red Abolicionista de Liberación Familiar (FLAN por sus siglas en inglés). A finales de 2020, la administración Trump intentó deportar rápidamente a las familias de regreso a Haití, pero los grupos y defensores del FLAN en DC se unieron para lograr que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes alentara al DHS a conceder a las familias la reconsideración de sus solicitudes de asilo. Después de una exitosa campaña telefónica, incluido un TikTok viral que resultó en diez mil llamadas a miembros del Congreso, la mayoría de las reconsideraciones fueron concedidas y algunos vuelos de deportación a Haití fueron detenidos en la pista para remover a las

Comunidades Si, Jaulas No  
personas cuyos casos estaban siendo reconsiderados.

DWN incluyó los tres centros de detención familiar entre la lista de los Primeros Diez que la administración Biden debería cerrar en su primer año. La administración dejó de detener a niños en Berks, pero siguió deteniendo a mujeres, siguiendo la trayectoria de Hutto. Dilley y Karnes permanecieron abiertos y continuaron deteniendo a familias. Para hacerlos parecer más aceptables, la administración los rebautizó como “centros de recepción” y dijo que las familias sólo serían retenidas por períodos cortos, de conformidad con el acuerdo de Flores. En respuesta, miembros del FLAN criticaron a la administración Biden. Satsuki Ina escribió en un artículo de opinión para Time sobre el intento de cambiar su imagen:

No importa cómo se llame, una jaula sigue siendo una jaula. Lo sé de primera mano; En 1945, el gobierno de Estados Unidos publicó una película de propaganda sobre el campo de internamiento de Crystal City donde me encontraba, promocionando los jardines de flores, el personal médico y las entregas diarias de leche a esta prisión familiar. La película los cita como signos de las “condiciones de vida normales” dentro de la valla. Pero, a pesar de estas sutilezas superficiales, sabía que vivía en una prisión y que el trabajo de los guardias armados en las torres de vigilancia era impedir mi fuga.<sup>11</sup>

Los grupos mantuvieron un ritmo constante, presionando a la administración Biden para que pusiera fin a la práctica. A través de proceso presupuestario, presionaron para desfinanciar la detención familiar, y Congresistas introdujeron la Ley de Libertad para las Familias. Tomó casi un año, pero en diciembre de 2021, el gobierno estadounidense dejó de detener a familias inmigrantes en Dilley y Karnes, más de veinte años después de que iniciara la práctica en Berks.

En Pensilvania, la coalición Shut Down Berks continuó sus esfuerzos para cerrar las instalaciones; La detención familiar había galvanizado a la comunidad en oposición, pero el grupo había adoptado una postura abolicionista. En los ocho años que existió la coalición, se unió una amplia variedad de grupos de Pensilvania. Unieron servicios legales, amplificaron las exigencias de inmigrantes detenidos y abogaron a nivel estatal y federal por el cierre de la instalación. En noviembre de 2022, la coalición declaró la victoria cuando ICE anunció que pondría fin al contrato en Berks. Jasmine Rivera, quien ayudó a coordinar la coalición, celebró la resistencia de las personas detenidas: “Es una victoria especial para aquellos que fueron encarcelados: las madres que hicieron huelgas de trabajo y de hambre; les padres, madres, mujeres, que han hecho que se escuchen sus voces, que exigieron que esto no le pase a nadie más.”<sup>12</sup>

Si bien algunos activistas han percibido la campaña contra la detención familiar como una causa más comprensiva y, por lo tanto, aceptable, fue un laboratorio importante para desarrollar estrategias y tácticas abolicionistas. La decisión de centrarse en instalaciones específicas, el llamado al cierre y las campañas múltiples que incorporaron tácticas organizativas, legales y de promoción de derechos demostraron ser la estrategia más efectiva y una que se ha replicado en localidades de todo el país. A principios de 2023, surgieron rumores de que la administración Biden podría restablecer la detención familiar, pero la reacción inmediata a la noticia evitó el regreso de la detención familiar, al menos mientras se produce este escrito.

## California Lidera el Camino

Quizás no sea sorprendente que el estado con la mayor población nacida en el extranjero en la nación haya luchado más duramente para proteger a los inmigrantes de la detención y la deportación. Pero hace apenas treinta años, mientras California atravesaba una recesión económica, se convirtió en un semillero de iniciativas antiinmigrantes a nivel estatal, que culminaron con la aprobación de la Proposición 187 (ver capítulo 1). Mucho ha cambiado desde entonces. Gracias al trabajo incansable de las comunidades de inmigrantes y sus aliados, el estado de California se ha vuelto relativamente proinmigrante. En los últimos años, se ha prestado

mucha atención a las duras leyes estatales aprobadas en Florida y Texas para castigar a inmigrantes, pero en lugares como California, las estrategias a nivel estatal han sido esenciales para proteger a inmigrantes y presionar al gobierno federal para que cambie. El enfoque en las campañas a nivel estatal en California ha hecho que la legislación estatal, incluso para limitar la detención de inmigrantes, sea un sitio clave de defensa para el movimiento por la justicia inmigrante en todo el país.<sup>13</sup>

Durante la época de Obama surgieron varias campañas locales para poner fin a los contratos de detención en todo California. En el condado de Orange, conocido por su política conservadora y su voluntad de trabajar con ICE, el grupo liderado por personas indocumentadas Familia: Movimiento de Liberación Trans Queer lanzó una campaña de varios años contra la detención en la cárcel de la ciudad de Santa Ana, que tenía la primera unidad dedicada a personas queer e inmigrantes transgénero en el país. En 2016, después de numerosas acciones directas, incluidas huelgas de hambre de activistas y el cierre de una intersección de la ciudad, el ayuntamiento de Santa Ana anunció sus planes de eliminar gradualmente el contrato de ICE para 2020. La decisión provocó que ICE terminara el contrato a principios de 2017. El sheriff del condado de Orange, alegando que se trataba de una decisión puramente comercial, posteriormente puso fin a los contratos de ICE en dos cárceles adicionales contra las cuales grupos locales habían emprendido campañas (una de las cuales estaba incluida en la lista Expose and Close).

En el norte de California, después de una campaña de siete años, el sheriff del condado de Contra Costa puso fin al contrato de ICE en una cárcel del condado de Richmond (cerca de Oakland), que había detenido en promedio a 200 inmigrantes por día. La campaña, encabezada por el Freedom for Immigrants (el Movimiento Interreligioso por la Integridad Humana y la Libertad de los Inmigrantes FFI por sus siglas en inglés), implicó vigilias mensuales y coordinación con personas detenidas. La campaña contó con la participación de profesionales de la salud, sindicatos y miembros de la comunidad, quienes proporcionaron dinero para

fianzas para que las personas fueran liberadas y viviendas para quienes los necesitaban, y ayudaron a argumentar a favor del cierre. FFI visitó regularmente a inmigrantes detenidos en la cárcel, apoyando sus campañas de defensa contra la deportación y amplificando sus testimonios para argumentar en contra del contrato. En 2018, después de una serie de acciones, incluida una manifestación de 4.000 personas en el centro de detención durante el punto álgido de la crisis de separación familiar, el sheriff se sintió tan frustrado con las protestas que cercó toda la cárcel. La oficina del sheriff citó los costos asociados con la vigilancia de las protestas contra ICE como una de las razones para rescindir el contrato.<sup>14</sup> Después de que se terminara el contrato, los abogados locales notaron una reducción en la actividad policial de ICE en el norte de California. Activistas que formaron parte de esta lucha señalaron que la victoria “contribuyó a la idea de que detener a inmigrantes es inmoral e innecesario” y revelaron que “menos espacio de camas hace que sea más difícil alojar, detener y deportar a las personas”.<sup>15</sup>

En otras partes del estado, las comunidades lucharon por defender el cierre, en gran parte debido a la duradera economía carcelaria de California, que había hecho que muchas comunidades con problemas de liquidez dependieran de prisiones, cárceles y centros de detención. La comunidad rural de Adelanto, California, a unos noventa kilómetros al noreste de Los Ángeles, es uno de esos lugares. La ciudad se vio afectada por la crisis de la industria de defensa después del final de la Guerra Fría, cuando la Base de la Fuerza Aérea George fue desmantelada en 1992. Mientras el auge carcelario de la década de 1990 se producía en California y en todo Estados Unidos, Adelanto, la autoproclamada “Ciudad de Posibilidades Ilimitadas” se subió al carro y comenzó a aumentar su capacidad penitenciaria. El área ahora alberga varias instalaciones, incluida una prisión federal, una cárcel del condado y dos prisiones privadas, que anteriormente encarcelaban a personas del estado de California, pero que desde entonces se han convertido en centros de detención de inmigrantes. En conjunto, la capacidad para encarcelar a personas en o cerca de

Adelanto, que se acerca a las diez mil, representa casi un tercio de la población total de la ciudad.<sup>16</sup>

El Grupo GEO comenzó a detener inmigrantes

Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, una de las prisiones estatales convertidas, en 2011. Grupos de derechos de inmigrantes comenzaron a realizar vigiliyas periódicas fuera de las instalaciones poco después de su apertura. El contrato era un acuerdo de servicio intergubernamental, en el que la ciudad de Adelanto operaba como intermediario entre ICE y el Grupo GEO. GEO ha ampliado el centro de detención, convirtiéndolo en uno de los más grandes del país, con capacidad para detener a casi 2.000 personas. Como resultado, el condado de San Bernardino, donde se encuentra Adelanto, se convirtió en el condado con mayor número de arrestos en la comunidad por parte de ICE en el país. Más camas significaban más espacio para detener a inmigrantes. El centro es conocido por su mala atención médica y son frecuentes las huelgas de hambre en protesta por las condiciones. Al menos siete personas han muerto mientras estaban detenidas allí. El centro de detención de Adelanto y sus condiciones se convirtieron en un catalizador para impulsar intervenciones a nivel estatal, cambiando el enfoque de la defensa contra la detención en California y en todo el país.

Muchos grupos en toda California se han coordinado para apoyar a inmigrantes que frecuentemente han protestado por sus condiciones de confinamiento mientras estaban detenidos en Adelanto. Una huelga de hambre en el centro de detención llamó la atención del senador estatal Ricardo Lara. Se acercó al Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC por sus siglas en inglés), una organización de defensa legal con sede en California, y comenzó a considerar una legislación para frenar la detención en California. Las organizaciones de justicia para inmigrantes, incluídes jóvenes inmigrantes que se habían estado organizando para liberar a las personas de la detención, se unieron para formar la coalición Dignity not Detention (Dignidad, No Detención) para ayudar a aprobar legislación. Varias otras organizaciones se han unido a lo largo de los años, incluida la Inland Coalition for Immigrant Justice, que lanzó la campaña Shut Down Adelanto (Cierren Adelanto).

La coalición obtuvo lo que esperaban fuera su primera victoria en 2016, con la aprobación de un proyecto de ley para impedir que gobiernos locales operen como intermediarios entre ICE y empresas

privadas como GEO. Sin embargo, el gobernador Jerry Brown vetó el proyecto de ley, instando a DHS a tomar medidas para lograr una “solución más permanente”.<sup>17</sup> La coalición Dignity not Detention no se rindió y al año siguiente ayudaron a aprobar dos proyectos de ley que crearon una moratoria en la expansión de las detenciones tanto para empresas privadas como para gobiernos locales. Grisel Ruiz, una abogada de ILRC, dijo que la mayor atención e inversión en este trabajo de defensa después de la elección de Trump ayudó a generar la oleada de apoyo necesaria para obtener una legislación permanente contra la detención. Como explica Ruiz, “políticamente fue más fácil porque la narrativa en torno al inmigrante bueno versus al inmigrante malo no surgió de la misma manera”.<sup>18</sup> El cambio de Obama a Trump cambió el discurso. Pero la evolución del terreno sobre las reformas del sistema legal penal en medio de las protestas de Black Lives Matter, tanto en California como a nivel nacional, también influyó. Los esfuerzos por liberar a gente de las cárceles de California habían ido cobrando fuerza; Como resultado, muchos líderes inmigrantes anteriormente encarcelados fueron liberados y se unieron a campañas estatales contra la detención y la deportación. Algunos inmigrantes fueron transferidos a la custodia de ICE al salir de la prisión estatal, como el caso de Ny Nourn, una refugiada camboyana y sobreviviente de abuso doméstico que tenía una condena por delito grave por un asesinato perpetrado por su abusador. Historias como la de Nourn ayudaron a exponer los problemas de alentar a ICE a centrarse en “criminales peligrosos”. Organizadores y defensores obtuvieron una mejor comprensión de cómo funcionaba el sistema, aprendieron de quienes habían estado encarcelados y pudieron desafiar la narrativa de inmigrantes buenos versus los inmigrantes malos de manera más efectiva mediante la narración de historias, destacando casos individuales. Como resultado, la narrativa de Obama de “delincuentes, no familias” no tuvo la misma fuerza, y los políticos estaban dispuestos a ir más allá para apoyar a todos los inmigrantes. Esta vez el gobernador no vetó los proyectos de ley contra la detención.

El Grupo GEO pasó a la ofensiva tras la aprobación de estos proyectos de ley. La empresa empezó a expulsar a los gobiernos locales de su papel de

intermediarios para conseguir contratos directos con el gobierno federal y eludir las nuevas leyes estatales. ICE ayudó a GEO acordando contratos de emergencia que eludieron el proceso de contratación pública que normalmente se requiere. La coalición Dignity not Detention comenzó a trabajar para aprobar una prohibición de las prisiones privadas que eliminaría gradualmente estos contratos una vez que expiraran como estrategia para reducir la infraestructura de detención migratoria en el estado. Debido a la rapidez con la que GEO obtuvo el contrato directo con ICE, el contrato de Adelanto debía finalizar en 2019, después de solo un año.

Los esfuerzos de la coalición Dignity not Detention llevaron a la aprobación de la ley AB 32 de California en octubre de 2019. Como resultado de la ley, Adelanto y varios otros centros de detención privados en California deberían de cerrar en solo unos pocos años. Pero ICE y GEO se confabularon una vez más para eludir la ley estatal. La prohibición entraría en vigor en enero de 2020. En el corto tiempo transcurrido entre la aprobación de la AB 32 en octubre y su implementación, ICE aceleró el proceso y firmó contratos de quince años en los centros de detención privados restantes en California. Fue un resultado devastador para las comunidades inmigrantes en California y para la coalición Dignity not Detention que había luchado tan duro para poner fin a la detención en el estado. El gobierno federal y GEO demandarían al estado de California por la prohibición de las prisiones privadas, una demanda que la administración Biden también presentó una vez asumió su cargo. Como se explica en el capítulo 5, para los demócratas la cuestión nunca fue realmente las prisiones privadas, sino si la agenda carcelaria del gobierno podría continuar sin ellas. Biden eliminó gradualmente las prisiones privadas para el Departamento de Justicia y al mismo tiempo defendió su uso por parte de otra rama del gobierno federal.

Si bien el esfuerzo por poner fin a la detención en California a través de una prohibición de prisiones privadas a nivel estatal fracasó, los avances que lograron los grupos de justicia inmigrante allí sentaron las bases para importantes victorias en todo el país. Aprendiendo de los esfuerzos en California, organizadores y defensores en varios estados (Colorado, Illinois, Maryland, Nueva Jersey, Oregón y Washington) han logrado aprobar leyes que ponen fin a los contratos de detención o impiden nuevas expansiones, y otros están considerando medidas similares.

## El Medio oeste contra ICE

Durante el primer mandato de Obama, mientras ICE intentaba consolidar el sistema y pasar a prisiones privadas exclusivas para inmigrantes, el Medio Oeste se convirtió en un lugar clave para la expansión, dado que la mayoría de los inmigrantes detenidos en la región estaban recluidos en cárceles de condado. Lo que ICE no anticipó fue que un grupo dedicado de organizadores, defensores, líderes religiosos y gente común lucharían en cada sitio donde existía una propuesta, lo que llevaría a uno de los juegos de golpear al topo más efectivos que el movimiento jamás haya jugado. Fred Tsao, asesor político principal de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR por sus siglas en inglés), ha estado involucrado en estas luchas desde el principio. Desde su perspectiva, el componente central para ganar en todos estos sitios donde habían propuestas de detención fue el liderazgo de la comunidad local. En ocho campañas para detener la expansión, organizadores locales lograron tener éxito en cada lugar. Una lucha final en Dwight, Illinois, terminó cuando se aprobó un proyecto de ley estatal para bloquear la expansión. Las campañas para impedir la creación de nuevos centros de detención también abrieron espacio para poner fin a los contratos en las cárceles del condado utilizadas por ICE para detener inmigrantes. Para el verano de 2022, Illinois había puesto fin a la detención de inmigrantes en todo el estado. Los esfuerzos para detener la expansión en Indiana, Michigan, Minnesota y Wisconsin también tuvieron éxito. Gracias al movimiento, ICE no pudo conseguir su centro de detención en el Medio Oeste.<sup>19</sup>

La historia del fin de la detención en Illinois comenzó en 2007 con dos hermanas Católicas de la Misericordia, la hermana JoAnn Persch y la hermana Pat Murphy. Todos los viernes comenzaron a hacer vigilia afuera del Broadview Staging Center, donde inmigrantes eran trasladados en espera de su deportación, a veces en un clima helado y nevado, en los suburbios de Chicago. Las Hermanas también intentaron tener acceso para visitar a inmigrantes detenidos en la cárcel del condado de McHenry, ubicada al noroeste de Chicago. Como parte de la expansión de las cárceles del condado posterior al 11 de septiembre, el gobierno federal financió una ampliación de 6,4 millones de dólares de la cárcel del condado de McHenry para mantener a personas en

espera de juicio para el US Marshals Service (Servicio de Alguaciles de Estados Unidos) e ICE.<sup>20</sup> Tanto Broadview como McHenry negaron la solicitud de las Hermanas para visitar a inmigrantes. Comenzaron a trabajar con Tsao en ICIRR para aprobar un proyecto de ley que exige que las cárceles que retienen a personas para ICE brinden acceso a programas de atención pastoral para inmigrantes detenidos. En un esfuerzo por aprobar el proyecto de ley, muchos líderes religiosos se unieron para formar Interfaith Community for Detained Immigrants (la Comunidad Interreligiosa para Inmigrantes Detenidos, ICDI por sus siglas en inglés). El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, con el apoyo de muchos republicanos en nombre de la libertad religiosa, y se convirtió en ley en 2009.<sup>21</sup> Incluso después de que se aprobara el proyecto de ley, funcionarios del condado de McHenry intentaron resistirse a dar acceso, pero las Hermanas fueron muy persistentes y el condado finalmente instauró el programa de visitas.

Dos años más tarde, en 2011, ICE y CCA fijaron sus miras en la expansión en Crete, Illinois, una pequeña ciudad con una población de 8.000 habitantes, a unas cuarenta millas del centro de Chicago. El capítulo local de Pax Christi y otros defensores que trabajan con ICDI para luchar contra el centro de detención propuesto comenzaron a organizar campañas de petición, campañas electorales y a realizar vigilias en la intersección principal del pueblo. ICIRR también comenzó a presentar un proyecto de ley en la legislatura estatal para prohibir la detención migratoria privada. El estado ya había prohibido las cárceles privadas en 1990, pero la prohibición no se extendió a la detención de inmigrantes. En Chicago, miembros de la comunidad también se estaban organizando contra la cárcel. El 30 de marzo de 2012, el reverendo José Landaverde encabezó una marcha de cuarenta millas desde La Villita, un barrio predominantemente latine en Chicago, hasta el centro de Crete. Cincuenta activistas se unieron a él en la marcha de cuarenta y ocho horas con carteles que decían “Dinero para la universidad, no detención” y “No más jaulas”.<sup>22</sup>

Grupos en Chicago y Crete continuaron organizándose y fueron planeando una gran reunión pública con funcionarios electos y ICE en mayo. ICE, sin embargo, se enteró de la oposición al centro de detención. En medio de las masivas movilizaciones previstas contra la próxima cumbre de la OTAN en la ciudad, por temor a una protesta mayor, se retiró del foro

publico. Los organizadores cancelaron entonces el evento: Tsao y otros tuvieron que decirle a los setenta coches de seguidores que se habían presentado que se fueran a casa. El proyecto de ley para prohibir la detención privada todavía estaba en trámite en la legislatura estatal, pero cuando llegó a votación, se quedó corto por uno porque el botón “sí” no funcionó correctamente para uno de sus partidarios. Cuando terminó la nueva votación, los cabilderos de la CCA habían convencido a otros a que se opusieran al proyecto de ley, que fracasó. Pero los largos meses de organización habían dado sus frutos. Finalmente, la junta de la aldea de Crete decidió que el centro de detención de ICE causaba más problemas de lo que valía y votó a favor de retirarse del acuerdo de expansión.

Después de Crete, prácticamente todos los años se propuso un nuevo centro de detención, y en cada lugar un nuevo grupo de líderes locales comenzó a trabajar con ICIRR e ICDI para bloquear su construcción. En 2012, en Joliet, Illinois, CCA volvió a intentar conseguir un nuevo contrato para la detención, pero era un año electoral y organizadores hicieron campaña con éxito para elegir un nuevo miembro del concejo municipal, eliminando a un titular que era el principal defensor del nuevo centro de detención. CCA fue derrotada en Illinois, pero la batalla en el Medio Oeste estaba lejos de terminar.

En 2013, el Grupo GEO decidió intentar expandirse en el noroeste de Indiana, a las afueras de Chicago. En Hobart, Indiana, el Grupo GEO compró una propiedad para una nueva cárcel, pero, después de que miembros de la comunidad y las iglesias unitarias y metodistas locales se enteraron del plan, presionaron al alcalde para que se opusiera y GEO finalmente vendió el lote. En 2014, GEO volvió a intentarlo en Gary, Indiana. La lucha duró un par de años, pero finalmente terminó en 2016 después de que decenas de personas testificaran en una audiencia de cinco horas de duración que terminó con el consejo de la ciudad votando unánimemente en contra de la propuesta. Ese mismo año, en Illinois, otra empresa penitenciaria privada, MTC, intentó ampliar la detención privada en el municipio rural de Pembroke, sesenta y cinco millas al sur de Chicago. Después de cuatro victorias anteriores, residentes locales tenían la esperanza de poder bloquear la propuesta y, uniéndose a organizaciones con sede en Chicago, lo lograron. Después de eso, un sheriff del condado de Winnebago, Illinois, también consideró detener inmigrantes para ICE, pero dio marcha atrás en medio de la presión de la comunidad. Y luego CoreCivic volvió a intentar en el condado de Elkhart, Indiana, pero académicos locales del Goshen College, líderes de la comunidad latina y otros aliados persuadieron a la junta del condado para que rechazara la propuesta. En el condado de Newton, Indiana, Tsao recordó que un padre y un hijo “se alzaron” y movilizaron a sus vecinos para luchar y vencer a GEO.

Luego, después de ocho increíbles victorias en su haber, llegó la pelea en Dwight, una pequeña ciudad de Illinois a unas ochenta millas al suroeste de Chicago. En ese momento, parecía que los grupos de Illinois e Indiana eran imparables. Pero, como dice Tsao, Dwight se convirtió en la “excepción que demostró la regla”. El liderazgo local fue esencial para ganar; en Dwight, simplemente no lo tenían. Muchos se habían unido a la lucha a lo largo del camino, incluyendo Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones, un grupo de Chicago que había estado librando campañas contra las deportaciones y el uso de bases de datos de pandillas para hacer cumplir la ley de inmigración; líderes progresistas de varias comunidades del centro de Illinois; y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, con sede en Chicago, que aportó una perspectiva nacional a la lucha. El personal de DWN con sede en Chicago también brindó apoyo. Pero en Dwight, que durante muchos años había albergado una prisión estatal para mujeres, la comunidad local estaba más abierta a un nuevo centro de detención y los opositores estaban menos dispuestos a hablar públicamente u organizarse.

Immigration Centers of America (ICA), una pequeña empresa penitenciaria privada que sólo operaba otro centro de detención de inmigrantes, en Virginia, cortejó al alcalde de Dwight. Cuando los planes se hicieron públicos en 2019, ya tenían borradores de acuerdos; todo lo que necesitaban era una votación de la junta municipal. ICA le había prometido a Dwight un dólar por día por cada persona detenida, y los ingresos potenciales fueron un gran atractivo para el alcalde y la ciudad. En un momento dado, ICIRR y otros intentaron organizar un foro público con una iglesia local en Dwight, pero bajo la presión de la comunidad, la iglesia canceló el evento en el último minuto y los organizadores tuvieron que rechazar a la gente. En marzo de 2019, la junta del pueblo organizó una reunión especial en el gimnasio de la escuela secundaria. Las gradas estaban llenas de gente de Chicago, Bloomington, Peoria y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, todos oponiéndose a la cárcel. Pero al final fue el alcalde quien prevaleció y la junta del pueblo votó 5 a 2 a favor del nuevo centro

de detención. Fred Tsao señaló que “incluso obtener dos votos en contra de la cárcel fue una victoria dada la bienvenida que nos dieron en Dwight”.

Pero todo aún no estaba perdido. Poco después de la votación, ICIRR renovó sus esfuerzos para aprobar la prohibición contra la detención privada de inmigrantes en Illinois. Con un nuevo gobernador, JB Pritzker, dispuesto a contraatacar a la administración Trump, el proyecto de ley se convirtió en ley en junio de 2019 y el centro de detención de Dwight fue bloqueado.

La detención privada ya no existía en Illinois. Pero todavía había tres cárceles del condado en uso por ICE: la cárcel del condado de McHenry; la cárcel del condado de Kankakee, al sur de Chicago; y el Centro de Detención Tri-County en el extremo sur del estado, a unas seis horas de Chicago. Mark Fleming, un litigante principal del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, opinó que el uso de estas cárceles puede violar una ley estatal reciente que prohíbe a las cárceles del condado retener inmigrantes hasta que ICE pueda detenerlos. ICIRR comenzó a desarrollar la Ley Illinois Way Forward, trabajando para ampliar las políticas santuario en Illinois para incluir la prohibición de acuerdos de servicios intergubernamentales entre las cárceles de los condados y el ICE. Con una supermayoría demócrata en la legislatura estatal y Pritzker a cargo, el proyecto de ley fue aprobado, poniendo fin a los tres contratos de cárceles del condado. Los condados de McHenry y Kankakee intentaron bloquear la legislación, pero Fleming y demás defensores, anticipando tal desafío, incorporaron un lenguaje para garantizar que la ley estuviera protegida de posibles litigios. Su demanda fracasó y, en julio de 2022, Illinois ya no detenía inmigrantes para ICE.

Estas luchas locales y cierres de centros de detención fueron una victoria resonante que trajo lecciones cruciales sobre la importancia de que organizadores locales fuertes trabajen en conjunto con defensores a nivel municipal y estatal, así como con funcionarios electos. Fred Tsao continuaría asesorando a miembros de DWN en todo el país que estaban llevando a cabo campañas contra la expansión de la detención.

## Hudson y la lucha para poner fin a la detención en Nueva Jersey

Mientras están bajo custodia de ICE, los inmigrantes a menudo son transferidos de un centro de detención a otro, a veces dos o más veces. Los defensores han expresado su preocupación por las transferencias porque pueden perturbar los casos de inmigración y dificultar que inmigrantes accedan a servicios y permanezcan conectados con sus familias. ICE sostiene que los traslados ocurren

debido a limitaciones de capacidad, pero el traslado de inmigrantes entre centros de detención también es una táctica perversa que ICE utiliza para desorientar a inmigrantes mientras están detenidos. Como remedio, algunos defensores han propuesto situar los centros de detención cerca de áreas metropolitanas para evitar traslados y, por lo tanto, se han opuesto a poner fin a los contratos en ciertas instalaciones cercanas a las grandes ciudades. Pero los abolicionistas no están de acuerdo y argumentan que los centros de detención deberían cerrar independientemente de su ubicación. Para darle peso a su posición, un estudio reciente encontró que cuanto mayor es la capacidad de detención en un área determinada, mayor es la tasa de arrestos de ICE. Lo mismo se aplica a una mayor capacidad general de cárceles y prisiones en un área: con mayor capacidad, más arrestos realiza ICE.<sup>23</sup> El debate sobre los traslados y la geografía de la detención continúa siendo un tema polémico dentro del movimiento. Estas tensiones llegaron a un punto crítico en la lucha para poner fin a la detención en Nueva Jersey.<sup>24</sup>

Durante muchos años, la mayoría de los inmigrantes arrestados por ICE en la ciudad de Nueva York fueron enviados a cárceles en Nueva Jersey mientras esperaban sus fechas de audiencia. Una de estas instalaciones, la cárcel del condado de Hudson, tenía los mismos problemas que otras cárceles del condado: recreación al aire libre limitada, comida terrible, falta de ropa limpia, condiciones de vida sucias, abuso por parte de guardias de la prisión y muertes múltiples. Por estas razones, miembros de DWN en la ciudad de Nueva York, Families for Freedom, Human Rights First y algunos abogados locales presionaron para incluir a Hudson en la lista Expose and Close de los diez centros de detención de inmigrantes que cerrarían en 2012. Ese otoño, mientras planeaba la publicación de los informes, me di cuenta de que no habíamos hecho nuestra diligencia debida. Los miembros de DWN en Nueva Jersey no estaban de acuerdo. Creían que los cierres de centros de detención podrían conducir a traslados, y muchos grupos habían construido su programación como organizaciones sin fin de lucro en torno al apoyo al acceso a asesoramiento y visitas para inmigrantes detenidos en cárceles de

Nueva Jersey. Lo hablamos hasta el final; Al final, los grupos de Nueva Jersey permanecieron divididos. Algunos de ellos apoyaron a Expose and Close y otros no.

Seis años después, en 2018, se produjo un episodio similar, pero tanto la infraestructura de organizaciones sin fines de lucro y la rabia contra ICE habían crecido considerablemente en ese tiempo, haciendo que las tensiones dentro del movimiento en torno al cierre de las detenciones fueran aún más pronunciadas. Con Trump a cargo, los “estados azules” estaban consternados por el trato que ICE daba a inmigrantes. Muchas localidades deseaban distanciarse de la administración. En respuesta, el condado de Hudson puso fin a su acuerdo 287(g) en marzo de 2018, pero luego, en julio, durante una votación no programada, renovó su contrato con ICE para detener a inmigrantes en la cárcel. A medida que el llamado a abolir ICE se generalizó ese verano, los activistas aumentaron la presión sobre los funcionarios locales. Sorprendentemente, en septiembre de ese año, los funcionarios del condado de Hudson revocaron su decisión y planearon dejar de detener a inmigrantes antes de que terminara el contrato a fines de 2020.

Antes de estos acontecimientos, Robert Katzmann, juez de un tribunal de apelaciones de Nueva York, había estado abogando durante años para garantizar representación legal sin costo para los neoyorquines en detención migratoria. La mayoría de los inmigrantes que están encerrados no tienen acceso a abogados, y estar detenidos hace que sea mucho más difícil conseguir un abogado. Katzmann finalmente tuvo éxito cuando el Ayuntamiento de Nueva York decidió financiar la representación de neoyorquines detenidos en 2013. Esto generó una avalancha de dinero para proveedores de servicios legales en Nueva York y precipitó el lanzamiento del Proyecto de Unidad de Familias Inmigrantes de Nueva York (NYIFUP por sus siglas en inglés), que incluía a Bronx Defenders, la Legal Aid Society de Nueva York y Brooklyn Defender Services, específicamente. Al escuchar la noticia sobre la rescisión del contrato de Hudson, los grupos de NYIFUP enviaron una carta a los funcionarios del condado:

Respetuosamente le imploramos que posponga la votación sobre una resolución que elimine gradualmente el contrato con [ICE]. Para ser claros, apoyamos firmemente el movimiento para abolir ICE y creemos que no hay lugar para el encarcelamiento de solicitantes de asilo, miembros de la comunidad desde hace mucho tiempo, o cualquier otra

persona basada en su lugar de nacimiento en una sociedad justa. Dicho esto, poner fin a los contratos para la detención de ICE en cárceles cercanas a grandes comunidades de inmigrantes donde se proporcionan abogados de forma gratuita (mientras ICE continúa realizando arrestos en estas comunidades) hará mucho más daño que bien y nos preguntamos si las personas directamente afectadas participaron en esta decisión. Al finalizar el contrato con ICE, ya sea mañana o en 2020, el Condado estaría perjudicando a las personas detenidas y a otras personas arrestadas por ICE en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York.<sup>25</sup>

Desde su perspectiva, era más importante mantener el contrato para que las personas no fueran trasladadas, lo que les dificultaría brindar representación.

La declaración del NYIFUP dividió al movimiento. Muchas organizaciones, incluidos miembros de DWN en Nueva York y Nueva Jersey, ahora dudaban en apoyar el fin del contrato de Hudson debido a la postura de NYIFUP sobre el tema. Y las tensiones se extendieron por todo el país. Los organizadores y abogados estaban en desacuerdo y, como resultado, hubo confusión sobre si apoyar o no las campañas de cierre.

Estuve en la ciudad de Nueva York poco después de que se publicara la declaración y me comuniqué con un abogado de NYIFUP por correo electrónico para ver si podíamos reunirnos para discutir sus inquietudes. Pasaron unas semanas antes de que DWN lanzara la campaña Comunidades Si, Jaulas No, y me preocupaba que, si defensores en la ciudad de Nueva York no afirmaban nuestros llamados para poner fin a la detención, eso podría perjudicar las muchas campañas que estábamos apoyando en todo el país para cerrar centros de detención. En respuesta al correo electrónico, el abogado de NYIFUP envió una copia a cinco abogados adicionales para programar un horario para hablar con todos ellos. La llamada fue uno de los puntos más bajos de mis muchos años haciendo este trabajo. Le pedí a un colega que se uniera a mí e hicimos todo lo posible para defender la rescisión del

contrato. Le expliqué que estábamos trabajando con grupos en todo el país para cerrar los centros de detención y que construir poder contra ICE en comunidades como la ciudad de Nueva York, donde hay más recursos y capacidad, sería esencial para la lucha nacional. Les abogados de NYIFUP nos dijeron rotundamente que no estaban de acuerdo y que nuestra estrategia no funcionaría.

Algunes de los abogados de NYIFUP estaban tan convencidos de su argumento de que durante una conferencia telefónica nacional a la que me uní sobre la campaña por la representación universal, un abogado afirmó que no había “suficiente detención” en Nueva Jersey. Al parecer, ella estaba planteando este argumento porque las transferencias continuaron a pesar de un reciente aumento en la capacidad de ICE de la cárcel del condado de Hudson. El académico y activista James Kilgore se ha referido a este tipo de pensamiento como “humanismo carcelario”, según el cual, en la mente de algunos defensores y políticos, las cárceles son lugares donde se prestan servicios sociales. Kilgore señala casos en los que los gestores penitenciarios afirman ofrecer apoyo de salud mental “proporcionando oportunidades y mejores circunstancias a las personas detenidas”, ignorando el trauma de estar encarcelado.<sup>26</sup> En el caso de Hudson, para los abogados con financiamiento para representación legal, estar cerca de los centros de detención era necesario para brindar asesoramiento a inmigrantes y mantener intactos sus programas.

Pero no todos en las organizaciones NYIFUP estuvieron de acuerdo con esta evaluación. Sophia Gurulé, abogada de Bronx Defenders, uno de los proveedores de NYIFUP, apoyó el llamado a la abolición de la detención. Si bien brindar apoyo legal era importante, no creía que debiera ser un argumento para mantener a las personas detenidas en las horribles condiciones de Hudson. Más tarde se uniría a otras para cambiar la posición del NYIFUP y avanzar en la campaña para poner fin al contrato en esa cárcel.

Mientras tanto, Tania Mattos, una inmigrante boliviana que llegó a Estados Unidos cuando tenía cuatro años, había sido testiga del impacto de los arrestos de ICE en su comunidad en Queens durante años. Comenzó a organizarse para apoyar a inmigrantes neoyorquines y se conectó con DWN. En 2018, asistió a una conferencia de miembros de DWN en Denver, donde participó en un taller dirigido por miembros de la coalición California Dignity Not Detention sobre sus esfuerzos para aprobar legislación estatal

para frenar la detención. Mattos se unió a otros grupos en Nueva York, incluidos Desis Rising Up and Moving, Black Alliance for Just Immigration y Queer Detainee Empowerment Project. Juntas decidieron ver si podían hacer algo similar en la costa este. El grupo inicial de grupos planeó reuniones para “Abolir ICE” en 2019, pero las tensiones en torno al contrato de Hudson aún estaban frescas y muchos grupos establecidos en la ciudad dudaban en involucrarse con ellos. Mattos sabía que debido a que los neoyorquines estaban detenidos en Nueva Jersey necesitaban trabajar con grupos allí, y posteriormente se acercó a grupos de base en Nueva Jersey, incluidos los capítulos locales del Movimiento Cosecha, los Socialistas Democráticos de América y Pax Christi, que estaban alineados con la exigencia de poner fin a la detención.

En febrero de 2020, la situación comenzó a agravarse cuando un agente le disparó en la cara a un familiar de alguien que estaba siendo atacado por ICE durante una redada de inmigración en Brooklyn.<sup>27</sup> Mientras la administración Trump se quejaba de que las políticas santuario en lugares como la ciudad de Nueva York que les impedían hacer su trabajo, ICE atacó violentamente a inmigrantes que vivían en la ciudad mediante redadas en sus hogares y les envió a la cárcel del condado de Hudson. También se estaban realizando redadas en Nueva Jersey y, con el inicio de la pandemia, organizadores y defensores comenzaron a movilizarse para lograr la liberación de las personas detenidas. A mediados de marzo de 2020, varios cientos de inmigrantes detenidos iniciaron huelgas de hambre en tres de las cárceles contratadas por ICE en Nueva Jersey, lo que provocó que los grupos del NYIFUP pidieran liberaciones masivas.<sup>28</sup> Never Again Action, un grupo de activistas liderado por jueces centrados en la justicia inmigrante, coordinaron manifestaciones automovilísticas para apoyar a los huelguistas de hambre.<sup>29</sup> El esfuerzo de “Abolir ICE” luego se expandió, y un conjunto de grupos dispares que luchaban contra la aplicación de la ley de inmigración se unieron para formar Abolish ICE NY/NJ.

El contrato de Hudson siguió siendo un punto de discordia y con la pandemia y los levantamientos de George Floyd, más personas que nunca estaban a favor de rescindir el contrato. Como todo se volvió

virtual, resultó más fácil para las personas asistir a audiencias públicas sobre contratos carcelarios. Les activistas se enteraron de que era inminente otra votación sobre el contrato de Hudson. Los grupos comenzaron a coordinarse para asegurarse de que la gente asistiera a las reuniones del condado para seguir lo que estaba sucediendo con el contrato. Mientras tanto, algunas de las organizaciones del NYIFUP estaban llevando a cabo campañas internas de sindicalización y, en el proceso de conectarse entre sí, se enteraron de que más personal del NYIFUP apoyaba el plan para terminar el contrato en Hudson. En noviembre de 2020, les comisionades del condado de Hudson debían votar una vez más sobre el contrato de ICE. Amy Torres de la Alianza para Justice Inmigrante de Nueva Jersey dijo que todos se pusieron manos a la obra una vez que supieron que se iba a votar: “Comenzamos a realizar llamadas a les comisionades del condado, organizamos capacitaciones por Zoom para que la gente pudiera unirse a la audiencia, reunimos cartas de apoyo, organizamos una conferencia de prensa y empujamos a les alcaldes locales a hacer declaraciones públicas en contra del contrato”.

Más de 150 personas se unieron a lo que terminó siendo una reunión pública maratónica de diez horas que se prolongó hasta bien entrada la noche. Ni una sola persona habló a favor del contrato; la oposición fue unánime.<sup>30</sup> Previamente, NYIFUP había emitido una declaración, pero no tomó posición, explicando que “si bien los traslados siguen siendo una preocupación, también reconocemos que terminar el contrato con ICE puede promover nuestros objetivos de decarcelación y libertad para las personas que servimos.”<sup>31</sup> Sin embargo, los sindicatos de personal de dos de los grupos NYIFUP se habían manifestado en contra del contrato. Gurulé representó a su sindicato durante la reunión virtual y describió las condiciones “repugnantes” y similares a “tortura” en las instalaciones. Luego se dirigió a les funcionaries del condado: “Si votan para mantener este contrato, no se convengan de que lo hacen en el mejor interés de las personas detenidas por ICE en la cárcel del condado de Hudson. No estarás haciendo lo correcto. No serán heroes”. Haciendo caso omiso de las horas de testimonio de cien personas contra la detención de inmigrantes en Hudson, les comisionades votaron a favor de renovar

el contrato de ICE por otros diez años. En su explicación, citaron la posible pérdida de ingresos por la cancelación del contrato, así como la declaración de 2018 de NYIFUP, que los convenció de que estaban ayudando a las personas detenidas en Hudson.

Abolir ICE NY/NJ y otros defensores no permitieron que la decisión de Hudson les disuadiera, y más grupos se unieron al esfuerzo para terminar no solo el contrato de Hudson, sino también los otros contratos de ICE en Nueva Jersey. Comenzaron a presionar a Congresistas para que intervinieran. Ambos senadores de Nueva Jersey, Cory Booker y Robert Menéndez, emitieron declaraciones en contra de los acuerdos de cárceles del condado con ICE. Menéndez continuó llamando a los ingresos “dinero manchando de sangre”, lo que llamó la atención de los funcionarios estatales.<sup>32</sup>

Amy Torres y otros organizadores comenzaron a realizar vigilias frente a la casa del ejecutivo del condado Tom DeGise, quien estaba a favor del contrato de ICE. Torres dijo que las vigilias llamaron la atención de vecinos de DeGise: “Se mostraron comprensivos y nos pidieron pizza y nos trajeron galletas”.<sup>33</sup> Pero DeGise los calificó de “extremistas de izquierda”, presentó una orden de restricción en su contra e hizo que el sheriff se presentara y detuviera a varios de ellos y les acusó de desacato.<sup>34</sup> Las condiciones en una de las otras cárceles, en el condado de Bergen, empeoraron cuando guardias comenzaron a tomar represalias contra personas detenidas. En una acción celebrada en diciembre de 2020, los organizadores instalaron altavoces para amplificar los gritos de los inmigrantes detenidos a través de conversaciones telefónicas para exponer los daños que se producían adentro del centro de detención. En represalia contra la protesta, el sheriff los confrontó brutalmente durante la acción. Agentes utilizaron gas pimienta y derribaron a algunos manifestantes. Nueve personas fueron arrestadas, ocho de las cuales eran neoyorquines.<sup>35</sup>

Después de estos eventos, los organizadores comenzaron a reagruparse para considerar la forma más estratégica de poner fin a estos contratos. Aprendiendo de los esfuerzos en California, Illinois y otros estados, los grupos comenzaron a centrarse en la legislación estatal para imponer una moratoria a los nuevos contratos y a renovaciones de contratos. Mientras tanto, los funcionarios locales tanto en el condado de Hudson como en el condado de Essex, donde se encuentra otra cárcel de ICE en Nueva Jersey, decidieron que estaban hartos de toda la atención y anunciaron que dejarían de detener a inmigrantes en la primavera de 2021. La decisión ayudó a impulsar a funcionarios estatales de alto nivel para que aprobaran el proyecto de ley contra la detención en julio. Nueva Jersey, que en ocasiones tuvo cinco condados que detenían inmigrantes, solo quedó con un centro de detención.

Al otro lado del río, los defensores comenzaron su propio plan para aprobar legislación estatal contra la detención en Nueva York. A este punto, los grupos del NYIFUP comenzaron a cambiar de parecer y eventualmente dieron un giro de ciento ochenta desde su posición inicial.<sup>36</sup> Debido a que el cambio durante la pandemia hacia reuniones virtuales permitió a los abogados reunirse con clientes y asistir a audiencias desde cualquier lugar, todavía estaban capaces de proporcionar representación, incluso si las personas fueran transferidas. Había crecido la conciencia de que tener camas cercanas significaba que se podía detener a más personas que de otro modo no habrían sido el objetivo en primer lugar. Grupos en Nueva York comenzaron a presionar para que se aprobara su propio proyecto de ley Dignidad, No Detención, para poner fin a los contratos en las cárceles del condado al norte de la ciudad, y grupos del norte del estado y del NYIFUP se sumaron al llamado.

La campaña para poner fin al contrato en Hudson y los otros centros de detención en Nueva Jersey y Nueva York proporcionó muchas lecciones críticas para el movimiento. Después de que los funcionarios del condado de Hudson decidieran renovar el contrato por diez años más, Abolish ICE NY/NJ y sus grupos aliados no se dieron por vencidos. Por el contrario, perseveraron y redoblaron su exigencia de cierre. Lo que parecía una gran pérdida se convirtió en una victoria menos de un año después, cuando los mismos funcionarios locales decidieron dejar de detener inmigrantes para ICE. La oleada de actividad y claridad proveniente de una variedad de grupos y partes interesadas también ayudó a revertir la posición del NYIFUP sobre el tema, demostrando el poder de la construcción de movimientos y el trabajo organizativo sostenido.

## Lecciones Abolicionistas

Si bien muchas de las campañas presentadas en este capítulo se centran en climas políticos más amigables, estos triunfos contra la detención tuvieron impactos mucho más allá de los lugares en los que sucedieron. El creciente rechazo a la detención por parte de los estados impidió que ICE implementara su plan de tener

grandes centros de detención de inmigrantes exclusivos en cada región del país. La importancia de la abolición de la detención le forzó la mano al gobierno federal. En mayo de 2021, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, señaló en una audiencia en el Congreso que había un “uso excesivo de la detención”, lo que indica un cambio de opinión sobre el tema.<sup>37</sup> Para diciembre de 2022, la administración Biden había rescindido contratos en cinco centros de detención, citando preocupaciones en torno a condiciones. Tres de los cinco centros de detención que habían sido incluidos en la lista de los Primeros Diez hacia Comunidades Si, Jaulas No, de DWN. La solicitud de detención presupuestaria de Biden para 2023 habría reducido la capacidad a veinticinco mil personas, la mitad de lo que había sido durante su apogeo en 2019. La creencia de que la detención era necesaria había comenzado a perder influencia tanto entre defensores como entre políticos.

Desde que miembros de DWN comenzaron a pedir el cierre de centros de detención en 2012, funcionarios locales, estatales y federales han rescindido contratos en más de veinte centros de detención en respuesta a la organización interna y la presión comunitaria. Varios bastiones de ICE, como la cárcel del condado de McHenry en Illinois, que el gobierno federal subsidió para su expansión, y la cárcel del condado de Etowah, que los políticos de Alabama lucharon por mantener, ya no detienen inmigrantes para ICE. Campañas que parecían imposibles de ganar hace una década finalmente estaban teniendo éxito. Combinados con los esfuerzos locales para detener la colaboración de ICE y la policía, los arrestos y deportaciones de inmigrantes en el interior han disminuido considerablemente. No menos significativo es que la población diaria promedio anual bajo detención de ICE se mantuvo por debajo de los niveles de la era Obama durante los primeros tres años en el cargo de Biden. Si bien algunos atribuirán esta reducción de las detenciones a la era de la pandemia y a los duros cierres de fronteras implementados por Trump y continuados por Biden, la administración y los actores locales y estatales podrían haber mantenido el estatus quo, pero no lo hicieron. A finales de 2023, las detenciones de ICE volvieron a los niveles previos a la pandemia y Biden solicitó más fondos para la detención mientras el pánico fronterizo consumía el discurso político sobre inmigración. El cambio radical de la administración Biden muestra que la lucha para poner fin a la detención será una lucha constante. Pero la reducción del sistema durante estos años y la finalización de los contratos en numerosos centros de detención fueron importantes victorias del movimiento que no habrían sido posibles sin la exigencia a favor de la abolición.